

Opinión

Agricultura 2.0



Renato Segura Domínguez
Director
Didepro
Municipalidad de Chillán

La política pública en Chile todavía no distingue entre la actividad agrícola con la actividad económica de las zonas rurales. Es usual que la mayoría de los programas de los organismos sectoriales vinculados con la agricultura, busquen estimular el desarrollo rural poniendo el foco en la producción primaria y en el apoyo a los agricultores, especialmente a aquellos que tienen producciones de pequeña escala. Empero, la realidad muestra que, el bienestar de los hogares rurales ya no depende de la productividad agrícola.

La actividad agrícola en el país se ha centrado principalmente en mejorar los rendimientos de los cultivos. Utilizando como fuente de datos a Odepa, a principios de siglo (temporada 1999/00) el rendimiento del trigo en Chile alcanzaba los 38 quintales métricos por hectárea, en la temporada 2023/24 la cifra se incrementó a 60 qm/ha. La remolacha pasó de 600 a superar los 1.000 qm/ha. El arroz de los 50 a 68 qm/ha.

Detrás de estos notables avances, los agricultores han debido sortear los prolongados períodos de sequía, mediante inversiones en tecnología e infraestructura eficiente desde el punto de vista hídrico,

pero con un costo: disminución de la superficie plantada e importantes limitaciones a la producción agrícola.

El resultado en mayor productividad ha permitido sostener la actividad y desarrollar al sector exportador agrícola, con un crecimiento constante del PIB. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA indica que el PIB agrícola de Chile alcanzó los US\$28.900 millones en 2023. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las regiones exportadoras del país, el bajo nivel de internacionalización de la agricultura en Ñuble impide extender dichos beneficios a la actividad económica local.

En este sentido, los datos del VIII Censo Agropecuario y Forestal, año agrícola 2020 - 2021, INE-Chile, son reveladores. Al menos en el 64% de la superficie con cultivos agrícolas, las unidades productivas relacionadas no exportan. Este problema es especialmente crítico para el grupo de agricultores cerealeros, quienes deben enfrentar la volatilidad de los precios de los commodities en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, se requieren estímulos importantes que permitan reorientar el esfuerzo de la actividad agrícola hacia nuevos modelos de nego-

cios. El foco en el rendimiento, si bien es importante, no es la única variable de interés sobre la cual se deba trabajar. En esto, de la mano con el gremio del sector, la política pública puede contribuir en incentivar la conformación de conglomerados verticales en la industria cerealera. Es decir, reunir en torno a una corporación la actividad de varias empresas más pequeñas, que realizan actividades a lo largo de la cadena de valor de los productos.

Por ejemplo, el maíz es un producto agrícola que tiene miles de usos en la industria alimentaria y de generación de energía. Un conglomerado del maíz, podría incluir la integración vertical de empresas semilleras, agricultores, molinos, productores de aves, de cerdos, de bioetanol, etc. En este ejemplo, la mirada tradicional del agricultor del maíz cambia radicalmente, toda vez que debe poner la vista en la cadena de valor de dicho cereal, como materia prima.

Hace poco, una alta autoridad del Reino de Arabia Saudita advirtió: "Chile tiene minerales que queremos y no tenemos". Se podría agregar en esa canasta exportadora granos y productos alimenticios relacionados, que tampoco tienen e importan en grandes cantidades.